



**Pacto Internacional de Derechos  
Civiles y Políticos**

Distr. general  
26 de octubre de 2016

Original: español  
Español e inglés únicamente

---

**Comité de Derechos Humanos**

**Observaciones finales sobre el quinto informe periódico  
del Uruguay**

Adición

**Información recibida del Uruguay sobre el seguimiento  
de las observaciones finales\***

[Fecha de recepción: 21 de octubre de 2016]

---

\* El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.

GE.16-18565 (S)



\* 1 6 1 8 5 6 5 \*

Se ruega reciclar



**Párrafo 7 (El Estado parte debe garantizar que la INDDHH cuente con los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para el desempeño de su labor con plena independencia y eficacia, de conformidad con los Principios de París. Debe también adoptar las medidas necesarias para apoyar la función de la INDDHH como mecanismo nacional de prevención de la tortura, garantizando que sus recomendaciones se apliquen plenamente. El Estado parte debe instar a la INDDHH a que solicite su acreditación por el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos): El Comité solicita:**

**1. Información sobre las medidas adoptadas en 2015 para incrementar los recursos financieros, humanos y materiales**

**a) Recursos humanos**

1. Se informa que en el año 2015, la Institución Nacional de Derechos Humanos ha sido incrementada y revalorada en sus recursos humanos con la incorporación de un equipo técnico y consultores.
2. Como ya fuera informado al Comité, en sus inicios la INDDHH hasta 2015 contó con diez funcionarios/as que habían sido incorporados por el mecanismo de pase en comisión, en virtud del artículo 81 de la ley 18446.
3. En 2015 la INDDHH comenzó el proceso para incorporar funcionarios propios. Estos funcionarios/as prestan servicios y desarrollan sus tareas únicamente en la estructura funcional de la INDDHH y bajo la supervisión de su Consejo Directivo. El presupuesto aprobado por Resolución del Senado de la República asignó a la Institución recursos para incorporar, como personal permanente a una plantilla compuesta de: quince profesionales universitarios; tres funcionarios técnicos/as; un/a docente y veinte funcionarios/as administrativos/as. El 7 de junio de 2015 el Consejo Directivo, de acuerdo al mandato legal, publicó la convocatoria a concurso de oposición y méritos entre funcionarios/as públicos/as, preferentemente especializados/as en derechos humanos.
4. En función de las necesidades de funcionamiento de la INDDHH el llamado a concurso se realizó para proveer los siguientes cargos: 7 cargos Administrativos, 6 cargos Abogado/a, 4 cargos Licenciado/a en Psicología, 3 cargos Licenciado/a en Trabajo Social/ Asistente Social, 1 cargo Licenciado/a en Ciencias de la Comunicación, 1 cargo Licenciado/a en Sociología o en Ciencia Política, 1 cargo Personal Docente, 1 cargo Escalafón B Ayudante de Contador, 1 cargo Periodista, cumpliendo con las cuotas establecidas por leyes nacionales para personas con discapacidad prevista en la Ley 18.651, y la cuota para personas afrodescendientes prevista en el artículo 4 de la Ley 19.122. Los nuevos funcionarios asumieron sus funciones el pasado mes de abril.

**b) Recursos materiales**

5. El Artículo 80 de la Ley N° 18.446 dispone que “El Poder Ejecutivo afectará como sede de la INDDHH, un inmueble emblemático y simbólico para la naturaleza de la función que desarrollará”.
6. En el marco de los actos reparatorios del Estado uruguayo en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman vs. Uruguay, el 21 de marzo de 2012 por resolución del Poder Ejecutivo, se afectó el edificio ocupado por el Centro de Altos Estudios Estratégicos (CALEN) como sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

7. El edificio, sito en la calle Bulevar Artigas 1488-92 casi Palmar fue, durante la última dictadura cívico-militar, sede del Servicio de Inteligencia de Defensa (SID): un centro operativo utilizado para la detención clandestina de ciudadanos uruguayos y argentinos, en el marco del “Plan Cóndor”. La INDDHH busca que la casona se convierta en un lugar abierto y punto de referencia de los derechos humanos para todo el país.

8. La sede necesitaba importantes refacciones y reciclaje para ser ocupada. A partir de acuerdos con autoridades de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y el Ministerio de Vivienda, en noviembre de 2015 comenzaron las obras de reforma de la futura Sede de la INDDHH.

9. La conclusión de la primera etapa está prevista para octubre de 2016, previéndose la mudanza definitiva de la INDDHH para fines de noviembre próximo.

**c) Recursos financieros**

10. Ha habido un incremento sustancial del presupuesto destinado a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Del año 2012 al año 2016, hubo un aumento de más del 90% para el rubro “Gastos”, un aumento del 38% en el rubro “Inversiones” y un aporte especial y por única vez por las refacciones de la sede institucional.

**2. Recursos humanos y económicos asignados por el Estado para el mecanismo nacional de prevención, actividades realizadas por el mecanismo para efectuar visitas de supervisión periódicas a todos los centros de detención**

**a) Recursos humanos y económicos**

11. El equipo interdisciplinario que desempeñó tareas en el MNPT durante el año 2015 estuvo integrado por 7 profesionales. El Dr. Álvaro Colistro, integrante del Equipo Técnico de la INDDHH, cumple tareas de coordinación e integra los equipos de visita de los diferentes lugares de privación de libertad junto a los y las profesionales especialistas en las diferentes disciplinas aplicadas (psicología, educación, etc) a la problemática que desarrollan su labor en el marco del convenio celebrado con Unicef, o bien contratados directamente por la INDDHH.

12. La logística y recursos materiales proporcionados al MNPT durante el año 2015 han sido satisfactorios y respondieron a las necesidades para cumplir con la labor asignada.

13. La INDDHH tomó las medidas necesarias para que todos/as los integrantes del equipo interdisciplinario del MNPT contaran con las capacidades requeridas. A dichos efectos se promovió y convocó a la participación en distintas jornadas, seminarios, talleres, eventos y encuentros, a nivel nacional e internacional, a fin de incorporar e integrar los conocimientos adquiridos en la aplicación práctica de su labor.

**b) Actividades realizadas por el mecanismo para efectuar visitas de supervisión periódicas a todos los centros de detención**

14. Se considera central la intervención de la INDDHH y en particular del MNPT en el monitoreo a las condiciones de las personas privadas de libertad.

15. Se ha ido abordando la labor preventiva y de colaboración a fin de minimizar los riesgos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en las prácticas de los distintos sistemas estatales, donde se dispuso el cumplimiento de medidas específicas de institucionalización para personas que requieren de la protección estatal en el ejercicio de sus derechos, como aquella que se verifica como respuesta sancionatoria o punitiva debido a conductas contrarias a las normas penales.

16. Las actividades realizadas por el MNPT en el año 2015 se encaminaron a cumplir con las metas y objetivos previstos en el plan estratégico elaborado para el período 2014-2016, y de acuerdo a etapas dentro de las cuales se van incorporando, paulatinamente, los diferentes ámbitos de encierro institucional dentro del amplio espectro establecido en el artículo 4 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT).

17. En esta línea, se continuó el accionar referido al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, se avanzó en el diseño de estrategia de monitoreo al sistema de protección de niñas, niños y adolescentes y se incorporaron visitas al sistema penitenciario de adultos. En este último, se priorizaron aquellos establecimientos donde existen mayores déficit y carencias de acuerdo a las informaciones recabadas de diferentes fuentes (denuncias efectuadas en la Defensoría del Pueblo y en la Oficina del Comisionado Parlamentario, informaciones proporcionadas desde la sociedad civil, conocimiento y experiencia acumulada por los integrantes del equipo del MNPT).

18. Se tiene proyectado para el segundo semestre del año 2016 incorporar las visitas a seccionales policiales y para el año 2017, a los hospitales psiquiátricos.

19. El diseño de las visitas y la metodología de trabajo se elaboraron de forma diferenciada en cada uno de los sistemas, teniendo en cuenta las especificidades, necesidades y características de sus poblaciones, así como también las realidades y procesos de las distintas administraciones estatales. Todo esto a fin de recabar información relevante y detectar la multiplicidad y variedad de prácticas que representan un riesgo de eventuales violencias institucionales e interpersonales.

20. Se realizaron un total de 90 visitas de diferente tipo: de inspección (exhaustivas, constatando las condiciones generales de encierro y sus diferentes aspectos), especiales (examinando determinado tipo de situación que puede ser de riesgo de eventuales violencias institucionales o interpersonales) y de seguimiento de recomendaciones. Estas visitas permitieron realizar un total de 177 recomendaciones. Asimismo, se realizaron visitas de carácter exploratorio en la Colonia Etchepare y lugares donde se alojan personas con situaciones de sufrimiento mental (como el caso del Centro Génesis), a fin de tener los elementos necesarios para el diseño de visitas periódicas en los hospitales psiquiátricos, que se proyecta incorporar en las labores del MNPT en el año 2017.

21. Por otro lado, durante el año 2015, se completó el segundo año de monitoreo del Mecanismo Nacional de Prevención sobre el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.

22. En este período, se continuó con la estrategia general de trabajo desarrollada durante el año anterior, fundamentalmente en lo que refiere a los criterios empleados para la selección y periodicidad de las visitas. Se colocó el énfasis en el monitoreo de aquellos grupos considerados de mayor vulnerabilidad, como lo son los adolescentes varones menores de 15 años, las adolescentes mujeres y los internados en centros clasificados como de máxima seguridad.

23. Durante el año se realizaron 30 visitas, principalmente a los centros más complejos del Sistema. La mayoría de esas visitas estuvieron orientadas al seguimiento de las recomendaciones realizadas previamente, en tanto las visitas especiales correspondieron a ciertas circunstancias en las que la dirección del MNPT entendió que –aun cuando se realizaban frente a hechos consumados como motines o traslados, su presencia otorgaba garantías a la preservación de los derechos de los adolescentes.

**3. Información actualizada sobre la situación en que se encuentra la obtención de la acreditación de la INDDHH por el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos**

24. La Institución Nacional de Derechos Humanos recibió la Acreditación Grado A ante el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la promoción y protección de los Derechos Humanos (CIC).

25. Esta decisión del Comité, implica que la Institución Nacional de Derechos Humanos Defensoría del Pueblo, cumple con la totalidad de los “Principios de París” -aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas por Resolución 48/134 de 20 de diciembre de 1993-, que inspiran los estatutos de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.

**Párrafo 8 (El Comité insta al Estado parte a culminar la reforma del Código de Proceso Penal teniendo en cuenta sus anteriores observaciones finales en las que se requería la revisión a la luz de las disposiciones del artículo 9 del Pacto los procedimientos de detención y otras restricciones a la libertad personal de los imputados y acusados, teniendo en cuenta en particular el principio de presunción de inocencia): El Comité reitera la recomendación por considerarla no implementada.**

26. El Estado uruguayo, mediante la creación de la Ley N° 19293, tendrá un nuevo Código del Proceso Penal. La fecha de entrada en vigor prevista es febrero 2017 siendo probable que se retrase hasta el mes de julio próximo. Dicho Código introduce importantes modificaciones al sistema procesal penal del país otorgando nuevas funciones y un mayor protagonismo al Ministerio Público, quien deberá dirigir la investigación de los delitos y llevar adelante su persecución penal, debiendo además dar asistencia y protección a las víctimas y a los testigos de los mismos.

27. Este Código reconoce expresamente el derecho a ser tratados con el respeto debido a la dignidad de ser humano a todos los que intervienen en el proceso, en especial a la víctima del delito y a la persona a quien se le atribuye haberlo cometido.

28. De esta forma queda consagrado un sistema penal acusatorio, adversarial, oral y público. En el sistema actual actúa el principio del procesamiento con prisión. Con el nuevo Código Procesal Penal el principio es el contrario, la regla es la no privación de libertad durante el proceso, los que a la vez serán más breves.

29. Es así que la investigación de los ilícitos penales estará a cargo de los fiscales, quienes deberán presentar las pruebas a los jueces, encargados de resolver. De esta forma, la indagatoria del delito será llevada adelante por el Ministerio Público y no por el Juez como hasta el presente.

30. Además, por otra ley, Ley N° 19334, se crea la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado, institución que ejercerá las funciones del Ministerio Público y Fiscal. Es así que, todas las referencias efectuadas al Ministerio Público y Fiscal o Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, contenidas en disposiciones legales o reglamentarias, deberán entenderse realizadas a la Fiscalía General de la Nación.

31. Entre las variadas atribuciones que tiene el Ministerio Público, una de ellas es atender y proteger a víctimas y testigos, facilitando su intervención en el proceso así como evitando que sus derechos se vean afectados.

32. Los fiscales deberán realizar, entre otras, las siguientes actividades: informarle sobre el curso y resultado del procedimiento; informarle sobre sus derechos y las acciones de que dispone para ejercerlos; ordenar, o solicitar al juez, las medidas necesarias para la protección de la víctima y de su familia frente a hostigamientos, amenazas o agresiones.

33. La Ley considera víctima a la persona ofendida por el delito, y su participación en el proceso penal consiste en poder manifestar su intención de participar en el proceso, debiendo consignar sus datos y designar a quien será su abogado.

34. El Código prevé la designación de defensor público cuando la víctima, carente de recursos, lo solicite. De la misma forma, se le reconocen los siguientes derechos:

- 1) Conocer todas las actuaciones cumplidas desde el inicio de la indagatoria preliminar (excepto cuando el fiscal disponga su reserva para asegurar la eficacia de la investigación);
- 2) Intervenir en el proceso y ser oída;
- 3) Proponer prueba, contribuyendo con la actividad indagatoria y probatoria del fiscal;
- 4) Solicitar medidas de protección en caso de hostigamientos, amenazas o agresiones contra ella, sus familiares o allegados;
- 5) Oponerse, ante el juez, a la decisión del fiscal de no iniciar o de concluir la indagatoria preliminar, o no ejercer la acción penal;
- 6) A ser oída por el tribunal antes que dicte resolución sobre el pedido de sobreseimiento (desistimiento del ejercicio de la acción penal) u otra que ponga fin al proceso.

**Párrafo 19: (El Comité reitera su recomendación anterior (A/53/40, párr. 240) en la que se alentaba al Estado parte a encontrar una solución que se ajuste plenamente a las obligaciones que incumben a Uruguay en virtud del Pacto. En este sentido, el Comité señala el contenido de sus Observaciones generales N° 20 (1992), relativa al artículo 7 del Pacto, según la cual las amnistías son generalmente incompatibles con la obligación de los Estados de investigar actos de tortura (párr. 15), y N° 31 (2004), sobre la naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados parte en el Pacto, según la cual los Estados parte no podrán eximir a los autores de actos de tortura, ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales y desapariciones forzadas de su responsabilidad jurídica personal (párr. 18). El Comité invita al Estado parte a que señale a la atención de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia el contenido de los Principios de Bangalore sobre conducta judicial (E/CN.4/2003/65, anexo)): El Comité reitera la recomendación por considerar que no se ha aplicado ninguna medida para implementarla.**

35. En relación a la impunidad que se observa por aplicación de la Ley 15.848, en primer lugar, debe recordarse que dicha ley fue derogada por la promulgación de la Ley N° 18.831 el 17.10.2011.

36. En efecto, en su artículo 1° la Ley N° 18.831, restablece la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1° de Marzo de 1985 establecidos por la referida Ley 15.848, que permitió la culminación de un proceso político y legal, restando aún alcanzarlo en el ámbito judicial.

37. Ante demandas de inconstitucionalidad de la ley presentada por representantes del Ministerio Público, el 19 de octubre de 2009 la Suprema Corte de Justicia declaró por primera vez la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 y 3 de la Ley 15.848, por lo cual se permitió judicialmente avanzar en la investigación y responsabilizar a quienes cometieron delitos en violaciones graves a los derechos humanos en el período de terrorismo de Estado.

38. Como consecuencia y en cumplimiento del fallo del 24 de febrero de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Poder Ejecutivo dispuso por decreto 322/2011 la revocación inmediata por razones de legitimidad de todos aquellos actos

administrativos que oportunamente determinaron que los hechos que se denunciaban en los Juzgados por violación a los derechos humanos estaban alcanzados por la caducidad del art. 1º de la ley 15.848. Por lo cual todas esas causas archivadas en los respectivos juzgados fueron reabiertas sistemáticamente, las investigaciones reiniciadas produciéndose varios procesamientos a militares y policías que incurrieron en delitos contra los derechos humanos.

39. Por lo tanto, con este acto legislativo culmina un proceso formal en el cual se derogó la ley 15.848, se restableció el ejercicio de la acción punitiva del Estado, no se computan plazos de prescripción y caducidad y se declaran de lesa humanidad los delitos que antes estaban protegidos por la caducidad. En consecuencia, por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, puede decirse que al respecto se cumplió con la Sentencia de la CIDH.

40. Por otro lado las defensas de los denunciados, en forma sistemática demandaron la inconstitucionalidad de la aplicación de la ley 18.831 e interpusieron la excepción de prescripción.

41. La Suprema Corte de Justicia, por sentencia N° 20/2013, el 22 de Febrero de 2013, en voto por mayoría de cuatro Ministros en cinco, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 3 de la ley 18.831, manteniendo la vigencia del art. 1 por desestimar su inconstitucionalidad. Los principales argumentos manifestados radican en que los arts. 2 y 3 de la ley vulneran los principios de legalidad, y retroactividad de la ley penal más gravosa y con ello los arts. 10 y 22 de la Constitución de la República.

42. La sentencia en primer término mantiene el art. 1 de la ley, por lo cual no hay dudas que la ley 15.848 fue derogada. En segundo lugar hace una interpretación jurídica del resto de las normas las cuales declara inconstitucional, pero es de aplicación particular, esto es para el caso concreto.

43. Al respecto, puede resumirse como resultado de la investigación judicial que se han procesado y condenado aproximadamente, entre militares, policías y civiles, más de veinte personas, que incluyen a un Presidente de facto civil, un civil que fuera Ministro de Relaciones Exteriores del período de la dictadura y un Presidente militar de facto.

44. En la actualidad hay en trámite aproximadamente 209 causas judiciales en todo el territorio nacional, en las que se investigan delitos de lesa humanidad por desapariciones forzadas, torturas, homicidios, entre otros, ocurridos en el período de terrorismo de estado en el país.

---